

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
SALA LABORAL**



SECRETARÍA

EDICTO

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

HACE SABER:

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Radicación:	05001310502520210018801
Proceso:	ORDINARIO
Demandante:	ADELA DEL SOCORRO GALLEGUO ZAPATA
Demandado:	COLPENSIONES y PORVENIR S.A.
M. P.	ADRIANA CATHERINA MOJICA MUÑOZ SL TSM
Fecha de fallo:	13/10/2023
Decisión:	ADICIONA, REVOCA PARCIALMENTE y CONFIRMA.

El presente edicto se fija por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibidem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 17/10/2023 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, trece (13) de octubre dos mil veintitrés (2023)

DEMANDANTE	Adela del Socorro Gallego Zapata
DEMANDADAS	Colpensiones y Porvenir S.A.
ORIGEN	Juzgado Veinticinco Laboral del Circuito De Medellín
RADICADO	05001-31-05-025-2021-00188-01
TEMAS	Ineficacia de traslado de régimen pensional
CONOCIMIENTO	Consulta y apelación
ASUNTO	Sentencia de segunda instancia

AUTO

En atención al memorial aportado¹ se reconoce personería a la abogada KAREN SOFÍA SÁNCHEZ GONZÁLEZ, identificada con la CC 1.152.454.659 y portadora de la TP 383.959 del C. S de la J. para que represente los intereses de PORVENIR S.A.

SENTENCIA

En la fecha señalada, la Sala Sexta de decisión Laboral, integrada por las Magistradas ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, LILIANA MARÍA CASTAÑEDA DUQUE y la Ponente ADRIANA CATHERINA MOJICA MUÑOZ, profiere sentencia escrita al tenor de lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, dentro del proceso ordinario laboral promovido por ADELA DEL SOCORRO GALLEGO ZAPATA contra COLPENSIONES y PORVENIR S.A.

¹ 02SegundaInstancia; 03AlegatosPorvenir2520210188.pdf

I. ANTECEDENTES

Hechos y pretensiones de la demanda²

ADELA DEL SOCORRO GALLEGUO ZAPATA formuló demanda en contra COLPENSIONES y PORVENIR S.A. para que se declare **i)** la nulidad y/o ineficacia de su vinculación o traslado al Régimen de Ahorro Individual -RAIS-; **ii)** que su afiliación al Régimen de Prima Media -RPM existe sin solución de continuidad. En consecuencia, pide que se ordene a **iii)** PORVENIR S.A. trasladar a COLPENSIONES todos los aportes con los rendimientos de la cuenta de ahorro individual; **iv)** a esta reconocer y pagar la pensión de vejez desde el cumplimiento de los requisitos, junto con intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y/o la indexación; **v)** condenar en costas a las demandadas; y **vi)** extra y ultra petita.

De forma subsidiaria deprecó primero, que se declare que COLPENSIONES debe reactivar su afiliación en virtud de la aprobación del traslado de régimen elevado a PORVENIR S.A. el 5 de marzo de 2010, con las consecuencias ya enunciadas. Como segunda pretensión subsidiaria pidió condenar a PORVENIR S.A. al pago de perjuicios materiales ocasionados.

En el curso del proceso el apoderado judicial de la demandante desistió³ de las pretensiones de reconocimiento de pensión de vejez y de reconocimiento y pago de perjuicios, lo cual fue aceptado por la juez de instancia en la etapa de saneamiento de la audiencia del artículo 77 del C.P.T.S.S.⁴

La actora fundamentó sus pretensiones en que nació el 17 de enero de 1960 e inició cotizaciones al extinto ISS el 25 de febrero de 1982. El 30 de noviembre de 1998 suscribió formulario de traslado a la AFP PORVENIR S.A., en virtud de las ventajas advertidas por uno de sus asesores comerciales, el cual no informó sobre las implicaciones y consecuencias que acarrearía efectuar dicho traslado y los beneficios que perdería en el RPM.

² 01PrimeraInstancia; 01DemandayAnexos.pdf. págs. 3/16.

³ 01PrimeraInstancia; 33Desistimiento.pdf

⁴ 01PrimeraInstancia; 42ActaAudienciaArts77y80.pdf

El 5 de febrero de 2021 PORVENIR S.A. le comunicó que el capital ahorrado era insuficiente para acceder a una pensión de vejez, conforme a los cálculos realizados. El 26 de enero de 2010 diligenció formulario de traslado al RPM y manifestó acogerse a los efectos de las sentencias C-789 de 2002 y 1024 de 2004, solicitud que fue aprobada por PORVENIR S.A. el 5 de marzo de 2010 y el 16 de ese mes la AFP remitió los aportes al ISS, quien a su vez aceptó el traslado con las cotizaciones y los incluyó en su historia laboral.

Tras gestionar su corrección de historia laboral ante el extinto ISS por inconsistencias presentadas con las semanas cotizadas, el 3 de abril de 2019, solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, la cual fue negada mediante Resolución N°323074 del 26 de noviembre de 2019. La entidad señaló que se cumplían los requisitos determinados en las sentencias SU-062 de 2010 y/o C-1024 y por haber realizado la solicitud a menos de 10 años para la edad de pensión; sin embargo, esa situación no fue advertida en los 9 años que permaneció con tal administradora. Tampoco fue notificada de la existencia de un error, lo cual le genera graves perjuicios, al vulnerar su expectativa legítima de acceder a la pensión en el RPM.

Adicional a lo anterior, en escrito del 5 de febrero de 2021 PORVENIR S.A. le informó erradamente que con el saldo de su cuenta de ahorros no podía acceder a la pensión de vejez por no registrar información del bono pensional de COLPENSIONES, por lo que su opción era la de reclamar la devolución de saldos o cotizar mínimo 1.150 semanas para alcanzar una garantía de pensión mínima de vejez.

El 10 de junio de 2020 reclamó ante COLPENSIONES lo que deprecia con la demanda, pero recibió respuesta negativa el 12 de junio del mismo año porque el traslado al RAIS fue efectuado en ejercicio de su derecho de libre elección.

Contestación de la demanda

Quienes conforman la parte pasiva se opusieron a la prosperidad de las pretensiones incoadas, así:

i) PORVENIR S.A.⁵: afirmó que no existen razones fácticas o jurídicas que conlleven a la ineficacia o nulidad del acto jurídico de traslado, pues la demandante tomó tal decisión de forma consciente y espontánea, sin presiones o apremios. Se cumplieron los requisitos legales exigidos en la época, se brindó la información previa y suficiente sobre las implicaciones del traslado; además, la interesada suscribió el formulario de afiliación, el cual se encontraba acorde al ordenamiento legal, y así se dejó declaración escrita en él. Por ello, esto no puede entenderse como un mero requisito formal, ya que comprende una expresión inequívoca de su voluntad. Agregó que la decisión recayó únicamente en la afiliada, quien contaba con plena capacidad legal para adquirir obligaciones y dar su consentimiento, por lo que no toda omisión en el deber de informar afecta el consentimiento, más cuando no está acreditado el perjuicio, solo una diferencia en los montos de la prestación por vejez. Resaltó que la actora tenía el deber de informarse sobre el traslado como consumidora financiera, lo que exigía un grado de responsabilidad en el manejo de sus asuntos personales y, aunque tuvo la posibilidad de revertir su decisión de pertenecer al RAIS, nunca solicitó cambio de régimen, por lo que ratificó su interés de pertenecer al mismo. También se debe tener presente que las acciones para reclamar se encuentran prescritas, pues la ineficacia no versa sobre un derecho pensional. Excepcionó: prescripción, prescripción de la acción de nulidad, cobro de lo no debido por ausencia de causa e inexistencia de la obligación y buena fe.

COLPENSIONES⁶: refirió que la vinculación de la demandante con la AFP PORVENIR S.A. se presume válida y no es procedente declararla nula por cuanto se realizó en ejercicio de su derecho a la libre elección; además aquella se encuentra inmersa en la prohibición legal de traslado por faltarle menos de 10 años para cumplir la edad de pensión y no acreditar los requisitos dispuestos en las sentencias SU 062 y C-1024, razón por la cual la entidad anuló el traslado al RPM del 2 de marzo de 2010.

Excepcionó: falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia de la obligación, inexistencia de nulidad del traslado a la AFP PORVENIR S.A., inexistencia del reconocimiento y pago de la pensión de vejez, improcedencia

⁵ 01PrimerInstancia; 08ContestacionPorvenir.pdf. y 15Subsanacion.pdf, Nota: Las pruebas aportadas con ambos escritos pertenecen a otra afiliada Alba Medina, y no a la demandante.

⁶ 01PrimerInstancia; 09ContestaciónColpensiones.pdf.

de la obligación de pagar intereses moratorios, improcedencia de la indexación, inoponibilidad del acto jurídico de afiliación de la actora con la AFP PORVENIR S.A. frente a COLPENSIONES como tercero de buena fe, indebida aplicación del artículo 1064 del Código Civil, desconocimiento del principio de sostenibilidad financiera del sistema de pensiones en RPM, desconocimiento del precedente judicial, equivalencia del ahorro o diferencias pensionales, devolución de aportes debidamente indexados, devolución de cuotas de administración debidamente indexadas por parte de la AFP PORVENIR S.A., devolución de aportes debidamente discriminados, buena fe, prescripción, compensación, imposibilidad de condena en costas, condena en costas y la que llamó “innominada”.

Sentencia de primera instancia⁷

El 14 de julio de 2023, el Juzgado Veinticinco Laboral del Circuito de Medellín declaró la ineficacia del traslado realizado por la demandante el 30 de noviembre de 1998 al RAIS, y que para todos los efectos legales se entiende que siempre permaneció afiliada en el RPM administrado por COLPENSIONES.

Condenó a PORVENIR S.A. a trasladar a COLPENSIONES, dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia, todos los dineros que reposen en la cuenta de ahorro individual, incluyendo las cotizaciones completas y los rendimientos financieros. Ordenó reembolsar el valor de los descuentos para el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, prima de reaseguro de Fogafín, gastos o cuotas de administración, sumas adicionales de la aseguradora y reaseguradora, debidamente indexados; además los aportes al fondo de solidaridad en caso de haberse realizado, Señaló que los conceptos deben aparecer discriminados con sus respectivos valores, el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante. Ordenó a COLPENSIONES recibir de PORVENIR S.A. tales valores e incorporarlos como aportes pensionales efectivos en la historia laboral de la actora. Ordenó a PORVENIR S.A. que, en el evento de haber recibido el bono pensional en el que estarían representadas las cotizaciones al RPM, lo restituya a la OBP del

⁷ 01PrimerInstancia; 41.GrabacionAudiencia –Parte 2.mp4 y 42Acta AudienciaArts. 77 y 80.pdf.

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, para que ésta proceda con su anulación. Condenó en costas a PORVENIR S.A. y fijó las agencias en derecho en la suma de \$1.160.000.

La juez de instancia tuvo en cuenta el precedente judicial vigente en la materia y señaló que a PORVENIR S.A. le correspondía demostrar el cumplimiento del deber de información antes de la suscripción del formulario de afiliación, carga probatoria que no se satisfizo con el interrogatorio de parte, ni con los documentos aportados al proceso, por lo que procede la ineficacia del traslado de régimen pensional.

Recursos de apelación:

i) PORVENIR S.A.: apeló con fundamento en que la entidad cumplió con la normatividad vigente para la época en que se efectuó el traslado, pues fue en virtud del Decreto 2071 de 2015 y la Ley 1748 de 2014 que las AFP adquirieron el deber asesoría e información. Así, la obligación surgió con posterioridad al acto de traslado efectuado por la demandante -año 1998-. Agregó que la actora indicó en el interrogatorio que la AFP brindó una asesoría colectiva de alrededor de una hora de duración, lo cual no se acompasa con lo expuesto en la demanda.

En segundo lugar, solicitó revocar la condena por gastos de administración, primas de seguros y Fondo de Garantía de Pensión Mínima, pues tales conceptos están previstos en el artículo 20 de la Ley 100 de 1993, el cual faculta a los fondos a realizar un descuento del 3% para compensar esos conceptos; los primeros, son rubros que sufragan el manejo de los recursos de los afiliados tendientes a obtener rendimientos financieros, deber que se cumplió acorde a la documental que reposa en el plenario. Los descuentos para primas de seguros se realizaron con la finalidad de cubrir la eventual contingencia que por invalidez y sobrevivencia se presentara, ello a través de la respectiva aseguradora, por lo que tales recursos ya cumplieron el objetivo de manera que no hay lugar a ordenar su traslado, ni mucho menos indexado.

COLPENSIONES: solicitó que se revoque íntegramente la sentencia de instancia. Señaló que la génesis del proceso es la falta de información en el traslado de régimen, por lo que al disponer el regreso al RPM se incurriría en lo

mismo, puesto que tampoco hay información para el efecto, por lo que cualquier afiliación estaría viciada. Señaló que no se acreditó el perjuicio económico que sufriría la demandante, ya que no obran cálculos de mesada pensional en uno u otro régimen. Además, en la decisión atacada se traslada toda la carga a las AFP del RAIS sin estudiar el deber que recaía en la demandante como consumidora financiera, consecuencia que finalmente asume la administradora del RPM, lo cual contribuye a la descapitalización del sistema pensional, como fue advertido por la Corte Constitucional en sentencia 062 de 2010 al referir sobre la necesidad de la permanencia de los afiliados en los últimos 10 años antes de cumplir la edad pensional. En igual sentido se emitió concepto por parte de la entidad ante la Corte Constitucional, con el fin de advertir que las decisiones proferidas en las ineficacias de traslado generarán un perjuicio y hueco fiscal al sistema, pues las órdenes y conceptos objeto de traslado no serán suficientes para asumir las pensiones de los afiliados que no cuentan con ese periodo de permanencia.

Alegatos de conclusión en segunda instancia

Surtido el traslado para alegar de conclusión en esta sede, COLPENSIONES y PORVENIR S.A. lo recorrieron oportunamente, mientras que la activa se abstuvo de pronunciarse.

i) PORVENIR S.A.⁸: reiteró lo expuesto en el recurso de alzada: insistió en la validez de la afiliación que se acusa de ineficaz y que toda decisión judicial en casos como el objeto de estudio, debe tener como fin la estabilidad y sostenibilidad financiera del Sistema de Seguridad Social en Pensiones. Para ello es necesario hacer un análisis macro de las consecuencias derivadas de dichas autorizaciones, en cuyo sustento citó la sentencia de unificación proferida por este Tribunal Superior en proceso con radicado 05001310500720150129501 en que se negó lo pretendido, así como el Concepto de la Superintendencia Financiera de Colombia del 17 de enero de 2020 respecto a cómo deben operar las restituciones mutuas. En ese orden, pide revocar la orden de traslado del Fondo de Garantía de Pensión Mínima, la prima de reaseguro de Fogafín, los

⁸ 02SegundaInstancia; 03AlegatosPorvenir2520210188.pdf.

gastos de administración y las sumas de la aseguradora, junto con su indexación. Finalmente refirió que no es procedente la condena en costas porque siempre obró de buena fe.

ii) COLPENSIONES⁹: también reiteró los argumentos de alzada y, adicionalmente solicitó si se confirma la sentencia de instancia, se condicione el cumplimiento por parte de COLPENSIONES, al previo cumplimiento de PORVENIR S.A. en la devolución de la totalidad de las sumas de la cuenta de ahorro individual de la demandante y la actualización de la información en la respectiva base de datos.

II. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

La competencia de la Sala está dada por los artículos 66 y 66A del C.P.T.S.S., respecto de los puntos objeto de apelación. Igualmente se surte el grado jurisdiccional de consulta en favor de COLPENSIONES, conforme al artículo 69 del ibidem, modificado por la Ley 1149 de 2007.

Examinados los hechos y pretensiones de la demanda, la oposición formulada por las accionadas, y los argumentos de la decisión de primera instancia, la Sala deberá determinar: **a)** la viabilidad de declarar la ineficacia del traslado de la demandante al RAIS; de ser procedente dicha declaratoria, se precisarán, **b)** las consecuencias que ello acarrea, como que la afiliación al RPM se considere sin solución de continuidad, así como lo concerniente a los conceptos que deben remitirse desde la AFP del RAIS hacia COLPENSIONES.

Lo anterior, dado que el fundamento de las pretensiones de la demanda es el incumplimiento del deber legal de información por parte de la administradora privada, lo que al tenor del artículo 271 de la Ley 100 de 1993, ocasionaría no la nulidad, si no la ineficacia del acto jurídico, tal y como fue abordado por la juez de instancia.

⁹ 02SegundaInstancia; 04AlegatosColpensiones2520210188.pdf.

No se pronunciará la Sala respecto a lo alegado por PORVENIR S.A. en cuanto a las condena en costas emitida en contra de dicha AFP, porque este tópico no fue objeto del recurso de alzada, y los alegatos de conclusión no son la oportunidad procesal para agregar puntos de inconformidad.

Hechos relevantes probados documentalmente

ADELA DEL SOCORRO GALLEGO ZAPATA nació el 17 de enero de 1960¹⁰ y se afilió al extinto ISS el 25 de febrero de 1982¹¹. El 30 de noviembre de 1998¹² suscribió formulario de traslado a PORVENIR S.A. el cual se hizo efectivo el 1° de enero de 1999¹³. El 24 de enero de 2010 suscribió formulario de vinculación al extinto ISS¹⁴, la cual fue aprobada por PORVENIR S.A. como se desprende del escrito del 5 de marzo de 2010, en que se indicó que el acto sería efectivo a partir del 1° de marzo de 2010¹⁵. Mediante Resolución SUB323074 del 26 de noviembre de 2019, COLPENSIONES¹⁶ declaró la falta de competencia para resolver sobre el reconocimiento de la pensión de vejez solicitada el 3 de abril de ese año, y afirmó corresponderle a PORVENIR S.A. a quien ordenó la remisión de la solicitud. El 10 de junio de 2020¹⁷ la actora pidió a COLPENSIONES la reactivación de su afiliación ante esa entidad, que previamente había sido aceptada o en subsidio que anulara el traslado al RAIS, lo cual fue rechazado el 12 de junio de ese año¹⁸.

a) Ineficacia de la afiliación al RAIS.

Con la finalidad de determinar sobre este punto, es menester acudir a los siguientes preceptos normativos que regulan la materia:

¹⁰ 01PrimeralInstancia; 01DemandayAnexos.pdf. pág. 36

¹¹ 01PrimeralInstancia; 01DemandayAnexos.pdf. pág. 84 y 128 acorde a historias laborales actualizada al 27 de diciembre de 2019 y 1° de febrero de 2021, que reportan la fecha más antigua, dadas las inconsistencias presentadas en todas las historias laborales allegadas al plenario por la demandante.

¹² 01PrimeralInstancia; 01DemandayAnexos.pdf. Pág. 40

¹³ 01PrimeralInstancia; 01DemandayAnexos.pdf. pág. 48

¹⁴ 01PrimeralInstancia; 01DemandayAnexos.pdf. pág. 42

¹⁵ 01PrimeralInstancia; 01DemandayAnexos.pdf. pág. 46

¹⁶ 01PrimeralInstancia; 01DemandayAnexos.pdf. págs. 114/116

¹⁷ 01PrimeralInstancia; 01DemandayAnexos.pdf. Pág. 146

¹⁸ 01PrimeralInstancia; 01DemandayAnexos.pdf. Pág. 148/150

i) Los artículos 48, 53, 335¹⁹ y demás normas concordantes de la Constitución Política; ii) la Ley 100 de 1993 en sus artículos 1²⁰, 3, 4, 10, 12, 13 literal b, Inciso 3º del Literal c) del artículo 60, 90, 97, 271; iii) el artículo 4 y demás normas concordantes del Decreto 656 de 1994²¹; iv) el Decreto 692 de 1994; v) el Decreto 663 de 1993, cuyo artículo 72 en su literal f) adicionado por el art. 12 de la Ley 795 de 2003, contiene prohibiciones expresas²² para las entidades del sector financiero entre ellas las AFP; y vi) los artículos 4, 10, 12 y demás concordantes del Decreto 720 de 1994²³.

Adicionalmente es pertinente hacer un breve recuento de la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, que estructura el tema, y está contenida en las sentencias 31314 y 31989 de 2008; 33083 de 2011; 12136 y 46292 de 2014; SL9519 de 2015; 47125, SL19447 y SL17595 de 2017; SL3496 y SL4989 de 2018; SL1421, SL1452, SL1688, SL4360 y SL4426 de 2019; STL 3716, STL4001, STL4084, SL2877, SL4811 de 2020, y SL1217, SL782 de 2021, basada en la necesidad de determinar si en cada asunto concreto, la AFP receptora de la afiliación satisfizo tanto para ese momento, como durante la vigencia de la relación con quien demanda la ineficacia, la obligación consagrada en el numeral 1.º del artículo 97 del Decreto 663 de 1993, aplicable a las administradoras desde su creación, de *“suministrar a los usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la mayor*

¹⁹ Las actividades que desarrollan las AFP al tenor del **artículo 335 de la CN.**, son de interés público y su ejercicio está reglamentado por la ley, en razón de la función que desempeñan.

²⁰ Consagró el artículo primero de esa ley 100, como objeto del aludido sistema: *garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad “para obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la protección de las contingencias que la afectan.”*

²¹ Conforme al **artículo 4** y demás normas concordantes del **Decreto 656 de 1994**, las administradoras se sitúan en el ámbito de la **responsabilidad profesional**, que **las obliga a prestar de manera eficiente, eficaz y oportuna los servicios** inherentes a la calidad de instituciones de carácter previsional, considerados idóneos por sus conocimientos técnicos especializados y experiencia en compleja materia financiera, para garantizar derechos de sus asegurados; tal responsabilidad se mide con mayor rigor que el utilizado frente a las obligaciones entre particulares, en razón a la delegación del servicio público de seguridad social en pensiones que asumen en el RAIS, sostiene la SCL de la H. Corte Suprema

²² **Se les prohíbe: “No suministrar la información razonable o adecuada que a juicio de la Superintendencia Bancaria deba entregarse al público, a los usuarios o a los clientes de las entidades vigiladas para que éstos puedan tomar decisiones debidamente informadas y puedan conocer cabalmente el alcance de sus derechos y obligaciones en las relaciones contractuales que los vinculan o puedan llegar a vincular con aquellas”.**

²³ Norma reglamentaria de los arts. 105 y parcialmente del 287 de la ley 100 de 1993 en cuanto al régimen de promoción y de responsabilidad de las sociedades AFP, en que dispone en el inciso final del artículo 4: QUE LAS ACTUACIONES DE LOS VENDEDORES EN EL EJERCICIO DE SU ACTIVIDAD OBLIGAN A LAS AFP, respecto de la cual se hubiere promovido la respectiva vinculación, es decir, comprometen la responsabilidad de éstas como establece su art. 10 y precisa en el art. 12 que tales promotores deben suministrar suficiente, amplia y oportuna información a los posibles afiliados al momento de la promoción de la afiliación, durante la vinculación, y con ocasión de las prestaciones a las cuales tenga derecho el afiliado.

transparencia en las operaciones que realicen". Adicionalmente, no se puede predicar, como sostienen la pasiva y la Superintendencia Financiera, que la existencia del deber de asesoría solo se originó desde la expedición de la Ley 1748 de 2014 y el Decreto 2071 de 2015.

Advierte la alta Corporación de Justicia sobre la necesidad de que la decisión del traslado de régimen esté precedida de toda la información relevante que el fondo de pensiones proporcione a quien pretenda afiliarse, la cual debe ser suficiente, completa y clara sobre las implicaciones que conllevaría dejar el anterior régimen y sus posibles consecuencias futuras. Nótese que el Estatuto Financiero de la época, en los artículos 97 y siguientes, consagró que las administradas debían obrar no solo conforme a la ley, sino soportadas en los principios que orientan la buena fe, al punto de contemplar sanciones ante la falta de información relevante.

Más adelante la Corte Suprema de Justicia precisó que son deberes de las administradoras de pensiones:

- (i) Brindar información en todas las etapas del proceso de afiliación, desde la antesala hasta la determinación de las condiciones para el disfrute pensional.
- (ii) Que la información otorgada sea ser completa y comprensible. y,
- (iii) Que la información se proporcione con prudencia, teniendo obligación de buen consejo, que puede llevar incluso a desanimar al interesado de tomar una opción que claramente le perjudica.

Si bien los precedentes judiciales tenidos en cuenta por esta Sala corresponden a afiliados beneficiarios del régimen de transición, las razones que sustentan la ineficacia del traslado no tienen en cuenta esa circunstancia, por ser determinante en ello, la falta de información al potencial afiliado.

En ese orden, es necesario verificar en cada proceso si la AFP suministró de manera previa una *información clara, completa y suficiente*, en términos de transparencia y eficiencia, a fin de poder concluir que la decisión adoptada en tal momento, obedeció a un conocimiento diáfano y preciso, no sólo de lo que se

hacía, sino de las consecuencias que se derivarían de la suscripción del formulario de afiliación correspondiente y que por tanto, ese acto jurídico surgió de una real manifestación de voluntad, libre, espontánea y sin presiones.

Así, tal y como reitera la CSJ en sentencias SL 1688 de 2019 y 373 de 2020, radica en la AFP el deber de brindar una información oportuna y adecuada, ello, indiferentemente de si se tiene o no beneficio transicional o si se está próximo a adquirir requisitos para pensionarse, “dado que la omisión al deber de información se predica frente a la validez o no del acto jurídico de traslado.”

Por estas razones, lo argumentado por la pasiva en torno a la capacidad de la activa al suscribir el formulario, o su obligatoriedad de informarse en relación con las consecuencias de la celebración del acto jurídico, o sus actos de relacionamiento al efectuar cotizaciones, conocer extractos y no efectuar el traslado de régimen cuando legalmente estuvo habilitada para hacerlo, el no efectuar comparaciones entre fondos, o que las condiciones de funcionamiento de estos no son imposición de los mismos sino de la normatividad que los rige, no constituyen razones atendibles para exonerar del cumplimiento de sus obligaciones a las administradoras, menos aún, por cuanto en asuntos como el presente, no se discute la capacidad jurídica de los celebrantes, ni la licitud del o los traslados; se atiende es al hecho de haberse dado el traslado de régimen pensional sin que haya estado precedido de la satisfacción del cumplimiento del deber de información por parte de las administradoras que captaron a la afiliada, quien afirma que el asesor le indicó que el ISS se iba a acabar y que su mejor opción pensional era en dicho fondo.

Tampoco son admisibles los argumentos en cuanto a que el traslado obedeció a una decisión espontánea, sin presiones o apremios de alguna naturaleza, cumplió los requisitos exigidos en la ley y se satisfizo el deber de información en los términos exigidos para entonces, pues tal situación tampoco se acreditó, en tanto la defensa se limitó a afirmar que así había ocurrido.

Recuérdese que conforme a la carga dinámica de la prueba, ésta radica en cabeza de las AFP que a través de sus agentes que propiciaron el traslado de régimen del asegurado, tal y como se aprecia en la sentencia SL4426-2019, en

la cual la Corte expuso los motivos por los cuales las administradoras deben demostrar que suministraron una información clara y transparente, lo que se explica desde la premisa que la parte acora efectúa una afirmación indeterminada *-la de que no recibió información-* y es la AFP a quien corresponde demostrar que cumplió con sus deberes en esa materia, al hallarse en mejor posición de ilustrarlo, por cuanto debe conservar en sus archivos la documentación que soporta el traslado. Además, el fallador está facultado por el **artículo 167 del Código General del Proceso**, para distribuir la carga de la prueba y asignarla a la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar todos los elementos de convicción tendientes a esclarecer el objeto del litigio y, en asuntos como el que hoy se estudia, sin duda quien debe cumplir dicha carga es la AFP del RAIS, por cuanto: i) Maneja la carpeta con la historia de cada afiliado, así como la información que fue brindada al momento del trascendental acto del traslado o afiliación, **y la que se haya entregado a lo largo de su permanencia en el fondo**, dirigida a orientarlo sobre las mejores opciones para que tome las decisiones que más le convengan; ii) Conoce y posee los datos de ubicación y preparación que recibieron las personas que tuvieron a cargo la asesoría dada al interesado y que posibilitó el acto jurídico de vinculación o traslado al fondo de pensiones.

Como ya se dijo ADELA DEL SOCORRO GALLEGOS ZAPATA nació el 17 de enero de 1960²⁴, por lo que al 1° de abril de 1994, cuando entró en vigencia el SGSSP para ella, por ser trabajadora dependiente del sector privado, contaba con 34 años y no tenía 15 o más años de servicios y/o cotizaciones, por tanto, no fue beneficiaria del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. El 30 de noviembre de 1998²⁵ suscribió formulario de traslado a PORVENIR S.A., acto que acusa de ineficaz. Y aunque el 24 de enero de 2010 suscribió formulario de vinculación con el ISS²⁶, el que fue aprobado por PORVENIR S.A. según escrito del 5 de marzo de 2010²⁷, 9 años después COLPENSIONES se declaró incompetente y ordenó remitir la solicitud a la AFP privada, mediante Resolución SUB323074 del 26 de noviembre de 2019²⁸, al resolver sobre la solicitud de pensión de vejez de la actora.

²⁴ 01PrimerInstancia; 01DemandayAnexos.pdf. pág. 36

²⁵ 01PrimerInstancia; 01DemandayAnexos.pdf. Pág. 40

²⁶ 01PrimerInstancia; 01DemandayAnexos.pdf. pág. 42

²⁷ 01PrimerInstancia; 01DemandayAnexos.pdf. pág. 46

²⁸ 01PrimerInstancia; 01DemandayAnexos.pdf. págs. 114/116

Igualmente, fue practicado interrogatorio a la demandante, sin que se advierta confesión de su parte, pues en torno a las condiciones presentadas en su momento, manifestó que se trasladó al RAIS con PORVENIR S.A., en virtud de una campaña institucional ofrecida por la empresa en que trabajaba en ese momento, donde se efectuó una reunión con otras 40 personas que duró una hora. Allí los asesores advirtieron que el ISS se iba a acabar y que por dicha razón se debían trasladar los aportes a un fondo privado, sin indicar razones adicionales. No informaron sobre las desventajas que ello conllevaría ni los requisitos requeridos para pensionarse en el RAIS. Agregó que en el 2010 en la institución educativa surgió un rumor respecto a que habían sido engañados en esa campaña y que debían evaluar las condiciones pensionales; por ello solicitó nuevamente la afiliación al ISS, la cual fue aceptada a los 8 días por la entidad, pero después, cuando reclamó la prestación, se consideró que dicho traslado no fue válido.

En este caso PORVENIR S.A., como encargada de tramitar el traslado de régimen pensional, estaba llamada a demostrar que ese acto no se vio afectado en su eficacia por haber suministrado la información suficiente, clara y completa a la entonces potencial afiliada; sin embargo, no acreditó la satisfacción de su ineludible deber legal de brindar una oportuna información, además de adecuada, suficiente, cierta y comprensible, en términos de transparencia y eficiencia respecto de la vinculación en los dos regímenes pensionales. Tampoco sobre los beneficios e inconvenientes que generaría el suscribirse a un régimen o a otro, y en general, las consecuencias del tal afiliación, entre ellas, las modalidades de la pensión, el capital necesario para acceder a la pensión de vejez de manera ordinaria, o anticipada, los componentes y variables para establecer el monto de la prestación económica en el RAIS y su comparativo en el RPM, los requisitos para heredar el capital de la cuenta de ahorro individual en caso de fallecimiento, el derecho de retracto, las implicaciones de la negociación anticipada del bono pensional, la posibilidad e incluso la necesidad de hacer cotizaciones adicionales para obtener la prestación de vejez en el RAIS, entre otros aspectos relevantes, para generar el verdadero consentimiento, plenamente informado y por tanto, libre y voluntario en la selección o traslado de régimen de pensiones. Además, ese deber de información es exigible en cada

etapa de la afiliación y ejecución del acto jurídico, como bien lo ha aclarado la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

No se allegó elemento de convicción sólido, distinto del formulario de afiliación, respecto del cual PORVENIR S.A. adujo que no es dable restarle valor y menos desconocer el acto, al estar suscrito por la demandante, quien lo hizo de manera libre y voluntaria; sin embargo, en este sentido, las sub reglas establecidas por la Alta Corporación definen que al momento de analizar si resulta procedente declarar la ineficacia del traslado: **a)** no será suficiente la simple suscripción del formulario, sino el cotejo con la información brindada, la cual debe corresponder a la realidad; **b)** en los términos del artículo 1604 del Código Civil corresponde a las Administradoras de Fondos de Pensiones **allegar prueba sobre los datos proporcionados a los afiliados**, en la que deben constar los aspectos positivos y negativos de la vinculación y la incidencia en el derecho pensional. Conforme a la norma referida, la prueba de la diligencia y cuidado recae en quien debió emplearlo y ello no se satisface solo con allegar documentos previamente elaborados que suscriben las partes y en los que se limitan a llenar espacios en blanco, sino con la evidencia real de que la información plasmada atienda las pautas para que se adopte una decisión completamente libre, y que la asesoría brindada fue suficiente para la persona. Lo anterior es acorde con lo normado en **los artículos 97 y 98 del Estatuto Financiero vigente en 1994**, referidos a la debida diligencia que debían emplear las AFP, según los cuales no se trata sólo de completar un formato, ni adherir a una cláusula genérica, sino de brindar elementos de juicio suficientes para advertir la trascendencia de la decisión adoptada, en el cambio de prima media al de ahorro individual con solidaridad, sea que estuviere o no la persona en transición.

Lo considerado en esta providencia también sustenta que los actos posteriores al traslado, como el prolongado silencio o el sufragar aportes, no sean indicadores de la intención de pertenecer al Régimen de Ahorro Individual, punto en el que debe recordarse lo reiterado por la Sala de Casación Laboral, según la cual el debate probatorio en los asuntos de ineficacia de traslado se encamina a establecer si, con anterioridad y al momento de ese acto, se cumplió el tantas veces mencionado deber de información, **sin considerar los actos posteriores que el afiliado pudiese realizar**. Así, de manera uniforme se ha dicho que, si la

debida asesoría no se brinda con anterioridad y/o al momento de la materialización del traslado, al no cumplir su propósito de generar consentimiento informado para el acto, se equipara a la ausencia de información (**SL1688-2019, SL2877-2020, SL2937-2021, SL3349-2021**); adicionalmente, esa falta de información en la materia no se convalida por los traslados de administradoras dentro del Régimen de Ahorro Individual (SL3199- 2021).

De ahí que no procede adoptar el criterio aislado contenido por ejemplo en la providencia **SL2440-2021**²⁹, emitida por una de las Salas de Descongestión de la CSJ y en la cual se expuso la tesis de los llamados “*actos de relacionamiento*” que valga anotar, había formulado la Sala de Casación Laboral permanente en la sentencia SL413-2018, en un proceso donde se debatía el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes, y fue necesario analizar la voluntad de permanencia de la afiliada en un específico régimen pensional, por cuanto no resultaba diáfano a cuál de los regímenes pertenecía, litigio notoriamente ajeno a los asuntos de ineficacia de traslado de régimen pensional.

Conforme a todo lo expuesto, el incumplimiento de las mencionadas obligaciones de información por parte de PORVENIR S.A. se entiende vulnerador de la libre y voluntaria selección de régimen prevista en el literal b del Artículo 13 de la ley 100 de 1993³⁰ y genera consecuentemente la INEFICACIA DE LA AFILIACIÓN AL RAIS, como repuesta jurídica a la transgresión de ese deber legal. Ello implica que el acto jurídico declarado ineficaz carezca de vida jurídica y, por tanto, no produzca efectos, como fue precisado en la sentencia SL4360 de 2019, en la cual se concluyó que “*la sanción impuesta en el artículo 271³¹ de la Ley 100 de 1993 consagra una ineficacia en sentido estricto, lo que*

²⁹ por la Sala de Descongestión No. 4 de la Sala de Casación Laboral

³⁰ **13. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES.** El Sistema General de Pensiones tendrá las siguientes características:

b. La selección de uno cualquiera de los regímenes previstos por el artículo anterior es libre y voluntaria por parte del afiliado, quien para tal efecto manifestará por escrito su elección al momento de la vinculación o del traslado. El empleador o cualquier persona natural o jurídica que desconozca este derecho en cualquier forma, se hará acreedor a las sanciones de que trata el inciso 1o. del artículo 271 de la presente ley.

³¹ El empleador, y en general cualquier persona natural o jurídica que impida o atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de organismos e instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral se hará acreedor, en cada caso y por cada afiliado, a una multa impuesta por las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o del Ministerio de Salud^{<1>} en cada caso, que no podrá ser inferior a un salario mínimo mensual vigente ni exceder cincuenta veces dicho salario. El valor de estas multas se destinará al Fondo de Solidaridad Pensional o a la subcuenta de solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema General

conlleve que la consecuencia allí contenida es la exclusión de todo efecto al traslado". Lo anterior da lugar a garantizar el derecho del extremo accionante a retornar al Régimen de Prima Media con Prestación Definida hoy administrado por COLPENSIONES y a declarar que allí ha permanecido la afiliación, sin solución de continuidad, lo que conlleva la reactivación de su respectiva vinculación con este último régimen.

Tales motivaciones permiten **confirmar** en ese aspecto la sentencia.

b) Consecuencias de la declaratoria de ineficacia

En virtud del principio de sostenibilidad financiera del Sistema General de Pensiones, previsto en el Acto Legislativo 01 de 2005, con el fin de que COLPENSIONES cuente con los recursos necesarios, y fundamentalmente se garantice la no afectación financiera del régimen de prima media, y pueda satisfacer las prestaciones que se generen a su cargo, producto de la declaratoria de ineficacia, **todos** los recursos recibidos con motivo de la afiliación al Régimen de Ahorro Individual deben trasladarse a la administradora que tendrá a su cargo el reconocimiento de las eventuales prestaciones. Recuérdese que tales sumas repercutirán en la conformación de un eventual derecho pensional, dado que el RPM es un fondo común al cual ingresan de forma indistinta los recursos de todos los afiliados y que a través del sistema de reparto intergeneracional se cubren las prestaciones causadas. Además, es menester que, por efecto de la declaratoria de la ineficacia en asuntos como el abordado en este proceso, la parte beneficiada económicamente con el acto ineficaz por omisión del deber de información garantice que el patrimonio de la persona inducida a la afiliación no sufra deterioro, y pueda disfrutar de las prestaciones del RPM, como si hubiera permanecido en él.

Bajo las referidas premisas, se **confirmarán, adicionarán y revocarán parcialmente** las órdenes impartidas a **PORVENIR S.A.** en la primera instancia,

de Seguridad Social en Salud, respectivamente. La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador.
El Gobierno Nacional reglamentará los mecanismos para el control del pago de cotizaciones de los trabajadores migrantes o estacionales, con contrato a término fijo o con contrato por prestación de servicios.

en el sentido que esta AFP, dentro de los **30 días siguientes a la ejecutoria** de la presente providencia, no solo debe trasladar a COLPENSIONES **la totalidad** de las sumas que se encuentran depositadas en la cuenta de ahorro individual con los rendimientos financieros que se han generado durante todo el tiempo en que la hoy demandante figuró como afiliada al RAIS.

Así, **también debe trasladar a COLPENSIONES las cuotas de administración, el dinero con destino al Fondo de Garantía de Pensión Mínima y las sumas adicionales de las aseguradoras** descontadas durante el periodo de afiliación, pues no se discute la legalidad de tales descuentos, ni si el dinero fue administrado adecuada y eficientemente. En ese orden, como consecuencia de la ineficacia del traslado inicial al RAIS, por no haberse estudiado la situación particular de la hoy demandante previamente a la afiliación y al ignorarse cuáles fueron los argumentos esgrimidos por dicha AFP para aseverar que cumplió con los deberes de información, no es pertinente exonerarla de la devolución de tales conceptos, independientemente de que COLPENSIONES no haya administrado el dinero de los aportes, ni asumido los riesgos que esa actividad conlleva. Tampoco se puede discutir una inexistencia de motivos para entregarlos, detrimento patrimonial, ni enriquecimiento sin causa para COLPENSIONES y la parte actora, ni se transgreden derechos de las demandadas, por evidenciarse la omisión de asesoría completa y previa a la migración con destino al RAIS y dentro de ese mismo régimen, pues si bien existió una administración por parte de la AFP de orden privado, además del pago de seguros, consecuentemente a la declaratoria de ineficacia, todos los recursos deben trasladarse a COLPENSIONES, administradora que tendrá a su cargo el reconocimiento de las prestaciones que se genere en favor del extremo hoy demandante, como anteriormente se explicó.

Se rememora que a la luz del precedente de la Sala de Casación Laboral³² rememorado en sentencias **SL 3202-2021, SL 2769-2021, SL3708-2021, SL**

³² Esta Sala atiende el precedente judicial original de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, a partir la sentencia con radicado 31989 de 2008 y dando aplicación al artículo 1746 del Código Civil³², en los cuales fundamentan la *ratio decidendi* de estos procesos, donde esa Alta Corporación determinó que por efecto de la entonces denominada nulidad, hoy ineficacia, generada con ocasión del actuar negligente de las AFP del RAIS, en materia de información, éstas se encuentran obligadas a remitir a Colpensiones no sólo las cotizaciones, rendimientos, si los hubiere, cuotas o gastos de administración, lo destinado a garantía de pensión mínima sino también

3710-2021- SL 3706-2021, SL 3571-2021 y SL 3709-2021, las cuotas de administración, los descuentos del seguro previsional y lo destinado al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, descontadas por la AFP del RAIS durante el periodo de afiliación del extremo hoy demandante, se deben trasladar **debidamente indexadas y con cargo a sus propios recursos**, aspecto en el cual se adicionará la decisión de instancia, con el fin de que se satisfagan en su valor actualizado, dado la pérdida de poder adquisitivo de la moneda colombiana que constituye un hecho notorio.

Ahora, respecto a la orden emitida en torno a la devolución de la prima de reaseguro de Fogafín, debe expresarse un cambio de postura de la Magistrada Ponente, dada la integración a esta Sala de Decisión y una vez reexaminado el tema. Así, en nuevo estudio del asunto, se encuentra que tal concepto es ajeno a los descuentos efectuados sobre la cotización mensual de los afiliados al RAIS, y se asume con el patrimonio directo de cada AFP por ser un seguro de depósito obligatorio para todas las entidades financieras.

Al respecto, el artículo 99 de la Ley 100 de 1993 disponía que las administradoras y aseguradoras, incluidos las de planes alternativos de pensión, debían constituir y mantener adecuadas garantías, dentro de ellas la del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, con cargo a sus propios recursos.

No obstante, el artículo 163 de la Ley 1450 de 2011 dispuso: *“Elimínese la garantía de FOGAFÍN a las Administradoras de Cesantías y a las de pensiones en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad y la obligación a las Aseguradoras de inscribirse en el Fogafín. Las reservas existentes se trasladarán al Tesoro Nacional dada la condición de garante que tiene la Nación en ambos sistemas.”*

Así las cosas, no es viable ordenar el reintegro de esas sumas con destino a COLPENSIONES, razón por la cual **se revocará** la orden emitida en primera instancia en tal aspecto.

las sumas adicionales de la aseguradora, por tanto, se adopta en estricto sentido lo decidido por nuestro órgano de cierre en la materia, ordenando a la AFP del RAIS, que traslade a Colpensiones, los valores descontados a la demandante durante el tiempo de su afiliación en ella, por concepto de aportes para la Garantía de Pensión Mínima, y con cargo a sus propios recursos, sumas adicionales de las aseguradoras, además de las comisiones de administración.

Se precisará que, al momento de cumplirse esta sentencia, los conceptos deberán aparecer detallados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen.

El cumplimiento de tales órdenes será verificado por COLPENSIONES, de manera coordinada con **PORVENIR S.A.** sin trasladar consecuencias negativas a la parte actora.

Se ordenará a **COLPENSIONES** recibir de **PORVENIR S.A.** los recursos correspondientes a los conceptos aludidos, y se homologarán en el RPM las semanas cotizadas durante la afiliación en el RAIS.

No se acogerá lo alegado en esta sede por COLPENSIONES respecto al condicionamiento del cumplimiento de la sentencia, a la satisfacción previa por parte de PORVENIR S.A., pues ello implicaría imponer cargas administrativas a la afiliada que no debe soportar y, como ya se dijo, es deber de ambas demandadas verificar la satisfacción de lo ordenado de forma coordinada, sin trasladar consecuencias negativas a la actora.

III. EXCEPCIONES

Las excepciones formuladas por la pasiva quedan implícitamente resueltas, por haberse causado lo pretendido en la demanda.

En especial, no operó la prescripción pues la ineficacia no está sometida a dicha figura, por conllevar la inexistencia del acto jurídico sobre el que recae; además esta Sala acoge la postura pacífica de la H. Corte Suprema de Justicia reiterada en la Sentencia SL1197 de 2021, respecto a que las acciones judiciales tendientes a comprobar la forma en que ocurrió un hecho o se reconozca un estado jurídico, son imprescriptibles, como es el caso de la acción de ineficacia del traslado entre regímenes pensionales.

IV. COSTAS

Costas en esta instancia a cargo de PORVENIR S.A, por haber sido vencida en la alzada. Se fijan agencias en derecho en el equivalente a un SMLMV para 2023. No se emitirá condena en costas a cargo de COLPENSIONES pese a no haber salido avante el recurso, por tratarse de un tercero ajeno al acto jurídico que se revisa, y en virtud del grado jurisdiccional de consulta que su surtió en su favor.

En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: ADICIONAR los numerales SEGUNDO y TERCERO de la sentencia proferida por el Juzgado Veinticinco Laboral del Circuito de Medellín el 14 de julio de 2023, dentro del proceso ordinario laboral promovido por ADELA DEL SOCORRO GALLEGUO ZAPATA contra COLPENSIONES y PORVENIR S.A., en el sentido en que ésta última AFP:

Trasladará con destino a COLPENSIONES, dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de la presente providencia, la **totalidad** de las sumas que se encuentran depositadas en la cuenta de ahorro individual con los rendimientos financieros generados durante todo el tiempo en que la demandante ha figurado como afiliada al RAIS, y, **con cargo a sus propios recursos**, trasladará los valores descontados por concepto de comisiones de administración, primas de seguros y aportes para la garantía de pensión mínima, debidamente **indexados**.

El cumplimiento de la orden será verificado por COLPENSIONES de manera coordinada con PORVENIR S.A.

Se ordena a COLPENSIONES recibir de PORVENIR S.A. los valores correspondientes a los conceptos aludidos, y homologar en el régimen de prima media las semanas cotizadas por la actora durante su afiliación en el RAIS.

SEGUNDO: REVOCAR PARCIALMENTE el numeral SEGUNDO de la referida providencia, en el sentido de excluir de los conceptos ordenados trasladar, la prima de reaseguro de Fogafín.

TERCERO: Confirmar la sentencia en todo lo demás.

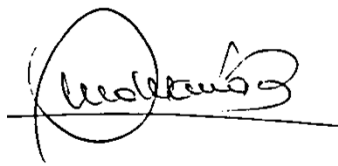
CUARTO: Costas en esta instancia a cargo de PORVENIR S.A. y en favor de la demandante. Las agencias en derecho se fijan en el equivalente a un SMLMV para 2023.

Notifíquese lo decidido por edicto y devuélvase el expediente al despacho de origen.

Las Magistradas,



ADRIANA CATHERINA MOJICA MUÑOZ



ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ



LILIANA MARIA CASTAÑEDA DUQUE